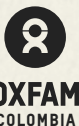


UNA MIRADA HACIA EL CAMBIO

Revelando las desigualdades
y la violencia en Colombia
que el COVID profundizó.



Instituto de
Estudios
Interculturales
UNIVERSIDAD
JAVERTIANA Cali

La gente
cambia
el mundo

Diakonia

Producción:

Oxfam Colombia, Diakonia - Programa Colombia, Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, y Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) - Programa por la Paz.

Comité Editorial:

Catalina Vásquez, Diakonia

Sebastián Cifuentes, Oxfam Colombia

Katalina Vásquez Guzmán, CINEP / PPP

Paola Jurado y Mario Mayolo, Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali

Edición General del Informe: Katalina Vásquez Guzmán y Danilo Arias Henao.

Textos y reportería: Fabiola Posada, Sebastián Cifuentes, Catalina Vásquez, Danilo Arias y Katalina Vásquez.

Estrategia de Comunicaciones: TRINEO TV

Diseño Grafico: Trineo TV Comunicaciones.

Estrategia de difusión: Oreja Roja

unamiradahaciaelcambio.cinep.org.co



UNA MIRADA HACIA EL CAMBIO

REVELANDO LAS DESIGUALDADES Y LA VIOLENCIA EN COLOMBIA

La llama de la lucha popular que arde en Colombia, y que tuvo su mayor expresión durante el segundo y tercer trimestre de 2021, tiene una larga historia y un contexto complejo que va más allá del “desorden público” y “los actos vandálicos” a los que la prensa comercial, el gobierno y el empresariado intentan reducir la mayor movilización social en la historia reciente del país.

Desigualdades, violencias e injusticias vividas por décadas se agudizaron con la llegada del Covid-19, un cóctel que rebotó la paciencia de los ciudadanos y que dejó en evidencia la crisis sanitaria y social que ubican a Colombia como uno de los países con peor respuesta a la pandemia donde ya han fallecido un poco más de 5 millones de personas en el mundo.

OXFAM, DIAKONIA, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y el CINEP / PPP presentan una mirada que busca, primero, ofrecer una visión de la desigualdad en Colombia aumentada por el COVID a partir de los informes de las organizaciones que conforman este tejido y, segundo, alzar las voces en favor de la vida y en exigencia de garantías para la movilización social a través de una campaña que dé cuenta de la realidad sobre la desigualdad en Colombia en medio de la crisis de derechos humanos vivida durante la emergencia sanitaria entre 2020 y 2021.

Finalmente, buscar medidas que permitan a los más desfavorecidos no solo ejercer su derecho constitucional a la protesta, sino medidas que aporten a superar el hambre, el desempleo, la pobreza, la muerte y el abandono estatal histórico.

También, como tarea pendiente, se encuentran las garantías para el ejercicio de la oposición política, algo que pretendía reparar el Acuerdo de Paz que avanza a tropezones, y que se ha agravado con la pandemia y la violenta represión al Paro Nacional. Que la sangre derramada y el clamor de justicia del pueblo colombiano no nos sea indiferente.





INTRODUCCIÓN



Para hacer conciencia de las graves consecuencias de la pandemia en Colombia y la enorme responsabilidad del Estado en este desenlace fatal y también la urgencia de “recomponer” el camino, ponemos a su disposición este texto que despliega una estrategia de difusión que incluye piezas sonoras y gráficas, y echa mano de una porción de nuestros conocimientos producidos por nuestros centros de investigación, certificados por Colciencias en el caso del Cinep/PPP, y cuya lectura y difusión pedimos a todos quienes deseen contribuir con la erradicación de las violencias y la superación de la desigualdad y la injusticia en el pueblo colombiano.

Queremos así poner en el centro del debate actual la vida y las difíciles experiencias de las poblaciones que acompañamos históricamente y que están llevando la peor parte en este duro momento que atraviesa la humanidad, en especial en las regiones de la Amazonía, el Pacífico y las ciudades capitales, pasando primero por una mirada global sobre cómo la pandemia ha empobrecido a los más pobres y enriquecido a los ricos.

Nuestra mirada está en especial con el pueblo colombiano que ha soportado por décadas el olvido, la marginación, la indiferencia y las violencias. Ellos merecen nuestro respaldo y requieren medidas urgentes de los gobiernos para enderezar el curso de esta tragedia. En esta crisis todos y todas estamos llamados a sumar. Por eso pedimos su colaboración con la divulgación de este documento y las diversas piezas de esta campaña que entraña algo de dolor pero también movimiento, fuerza y esperanza para transformar.



PRESENTACIÓN

Casi dos años después de confirmar el primer caso de Covid-19 en el país, Colombia no deja de padecer la pandemia de la desigualdad, la guerra y la muerte en sus territorios más alejados. Es más, el panorama humanitario, la economía -incluyendo el desempleo y el hambre- y la situación de las mujeres, se agravan (se sigue agravando)? desde la llegada de la covid.

Los primeros dos meses de 2022 estuvieron marcados por enfrentamientos, desplazamientos forzados, masacres y atentados a sedes de organizaciones sociales en Arauca, y el ya lamentablemente recurrente asesinato de líderes sociales, firmantes del Acuerdo y jóvenes en departamentos como Cauca, Chocó, Antioquia, Nariño, Meta, Putumayo, Valle del Cauca, Cesar, Caquetá y, mayoritariamente, en el complejo departamento fronterizo de Arauca.

A esto se suman las complejas condiciones económicas del país reflejadas en el hambre y desempleo que padecen los colombianos y colombianas. La moneda nacional cerró el 2021 como la más devaluada de la región: el dólar superó ya los 4 mil pesos colombianos y esto -en medio de las políticas económicas que privilegian las importaciones de insumos y alimentos, generado un aumento nunca antes visto en los precios de la canasta familiar, así como en el precio de suministros para la producción industrial interna. Además, al inicio del 2022 el país contaba con un millón de desempleados (plataforma de datos Statista) más que antes de iniciar la pandemia, cerró enero de 2022 con una inflación del 1.67%, el nivel más alto en los

últimos 23 años, además de un déficit fiscal del 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo a estimaciones del Ministerio de Hacienda.

La indignación ante una eventual reforma tributaria que pretendía gravar con más impuestos a los alimentos y, en general, poner más rentas sobre la clase media y baja en medio del revólucón social que provocaron el virus, el confinamiento y la respuesta estatal, fue mucho mayor al miedo de eventuales contagios por coronavirus y desde el 28 de abril del año anterior inició un Paro Nacional que reunió en las calles un enorme y diverso descontento popular. En Cali, Bogotá, Barranquilla, Popayán, Medellín y otras ciudades a diario las protestas -de múltiples formatos- fueron protagonizadas por jóvenes, indígenas, madres, estudiantes, obreros, campesinos y ciudadanos indignados y hastiados del hambre, la muerte y la violencia que han soportado históricamente y que se exacerbaban con la pandemia.

Al 27 de junio de 2021, en pleno pico del virus y de indignación social, Colombia tenía un poco más de 4 millones de casos de Covid confirmados y 104.678 personas fallecidas. Así se ubicaba entre las diez primeras naciones con mayor índice de contagio, y en el puesto número 72 en vacunación. Si bien cerró el año con 64.6 millones de dosis aplicadas y 28.3 millones de personas con esquemas completos, entre 193 países ocupó el deshonoroso puesto 13 en cantidad de muertes en lo que va de corrido de la emergencia mundial (129.942).

1.67%

Nivel de inflación más alto en los últimos 23 años.
*Plataforma de datos Statista.

Ni el clamor del personal sanitario por el pago de sus salarios y mejores condiciones, ni el de la ciudadanía por acelerar la vacunación y acondicionar las regiones más vulnerables como la capital o el Pacífico o la Amazonía -donde la infraestructura sanitaria es precaria- ni el llamado de auxilio por una renta básica para las mayorías populares en las zonas urbanas donde casi todos viven de la informalidad detenida por la cuarentena, fueron escuchados durante las movilizaciones.

En cambio, como revelan los informes de Oxfam, los ricos se hicieron más ricos, y los pobres más pobres en el mundo. En Colombia “el virus de las desigualdades” también mostró su cara: mientras el gobierno otorgó 25 billones de pesos en “auxilios” a los bancos entre enero y septiembre de 2020, su bancada política en el Congreso truncó la posibilidad de ofrecer “matrícula cero” -cupos gratuitos para estudiantes- a millones de jóvenes del país. Gracias a la presión social, el gobierno colombiano no tuvo otra salida que otorgar gratuidad en la matrícula cero a través de una política que se concretó en convenio con 63 universidades del país.



La bancada del gobierno en el congreso además, se opuso a los debates para otorgar subsidios de alimentos y monetarios que aliviarían a un grupo amplio de la población como lo hicieron la mayoría de democracias en la región y en el mundo.

Al drama del aumento de la pobreza, el desempleo y la deserción escolar; el regreso de las masacres durante el gobierno Duque (92 solo durante 2021 según Indepaz); el continuo asesinato a líderes, lideresas y ex combatientes; la exacerbación de la violencia contra las mujeres a causa del confinamiento con sus agresores; y la enfermedad misma del Covid y sus efectos devastadores en la región latinoamericana que sufre el virus con mayor rigor que el resto del mundo, se sumó la tragedia de la violencia en contra de la protesta social registrando, además de las cifras ya mencionadas, cientos de casos de desaparición de manifestantes y hallazgos de algunos de ellos con quemaduras o desmembrados.

Colombia confirmó que, tras la profundización de la inequidad y las violaciones a los derechos humanos en medio del confinamiento que fue aprovechado por actores ilegales para copar territorios y por la fuerza pública para atacar organizaciones campesinas e indígenas que se oponían a la sustitución forzosa de la hoja de coca, el panorama sí podía estar peor.

La ausencia de garantías para la protesta y la vida, y las graves violaciones a los derechos de los manifestantes y las comunidades despertaron alarmas locales y mundiales exigiendo al gobierno nacional y el Estado en su conjunto ofrecer caminos de diálogo con los y las manifestantes, y una respuesta acorde con un Estado de derecho, en vez de una represión propia de las dictaduras.

Los y las jóvenes que se movilaron -muchos de ellos huérfanos por el conflicto armado- no ven futuro en un país que brinda escasas oportunidades laborales y poco les puede educar y prefirieron arriesgarse en las barricadas y marchas antes que morir, como sus padres y abuelos, en un país rico pero sin oportunidades para los más pobres.

Las madres salieron a las calles para proteger a sus hijos e hijas que podían resultar asesinados, violados y desaparecidos por protestar, y en muchos casos consiguiendo en las “ollas populares” el alimento diario que no tienen en casa. Por su parte, los mayores, en su gran proporción sin pensiones y enfermos por un

sistema de salud precario que se privatizó a finales de los noventa con el liderazgo político de quienes hoy están en el gobierno nacional, engrosan las filas de millones de desterrados y viudas que tempranamente perdieron sus hijos, sus tierras, sus sueños de prosperidad y de tranquilidad para disfrutar sus últimos años.

En 2020 y sin conocerse aún las mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para 2021, el 42,5% de los colombianos eran pobres. Se estima que en ese momento más de 21 millones de personas vivían en la pobreza (6.8% más que en 2019) y los mayores aportantes a esta cifra estaban en las ciudades capitales.

En Bogotá, por ejemplo, había 3,3 millones de pobres, seguido por Antioquia con de 2,32 millones, y Valle del Cauca con 1,67 millones. Además, se calculaban más de 8 millones de víctimas del conflicto armado, según reportes de la Unidad de Víctimas, y serían 5.5 millones los colombianos y colombianas los desplazados en los últimos años por cuenta del conflicto en el cual resultaron asesinadas unas 220 mil personas según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

Las violencias y la desigualdad rampantes en Colombia no son pues nuevas, y el panorama humanitario venía ya en deterioro gracias al reacomodamiento de ilegales tras la firma del Acuerdo de Paz con la ex guerrilla de las Farc y los retrasos y tropiezos en la implementación del mismo. El tema de tierras, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y las garantías para el ejercicio de la oposición son algunos de los más críticos de acuerdo con informes de la Secretaría Técnica Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz integrada por Cinep/PPP y otros.

Durante el año anterior fueron asesinados 171 líderes y lideresas sociales en 108 municipios del país, según Indepaz, además de 48 firmantes del acuerdo de paz, entre ellos 4 mujeres. Cauca fue de nuevo el departamento que registró el mayor número de casos (31), seguido por Antioquia con 23 hechos y Nariño con 16.





Nada estaba en ideales condiciones en el país, sin embargo, la llegada de la Covid-19 reveló, como nunca antes, que pese a vivir en un Estado social de derecho, la mayoría de colombianos tiene menos garantías para sortear la enfermedad y sus consecuencias. La mayoría de muertes por Covid se registran en personas pobres y de clase media.

Según un análisis de la Universidad de Antioquia a las cifras del Dane y el Instituto Nacional de Salud (INS), entre los estratos 1, 2 y 3 se concentra casi el 90% de todos los fallecimientos por el virus en el país; al estrato 1 pertenece casi un tercio de todos los fallecidos (31.9%) mientras que en el estrato 6 solo ha sucedido el 0.8% de todos los decesos por el virus.

En general, el manejo de la crisis sanitaria y social de parte del gobierno nacional ha sido bastante cuestionado, pues mientras en China, donde empezó la pandemia, mueren tres personas por cada millón de habitantes, en Colombia son 1018 los fallecidos en la misma proporción. Y, finalizando el 2021, el país enfrenta su cuarto pico de contagios por cuenta de la variante Ómicron (de cinco a diez veces más contagiosa que anteriores como la Delta) con sistemas sanitarios deficientes antes de la pandemia y duramente golpeados por el impacto de la emergencia sanitaria

Entre tanto, la gente del común ve cada vez más lejanas sus posibilidades de recuperarse económica-

mente, de estudiar, de conseguir empleo, de recrearse, o incluso de sobrevivir. Las muertes del personal sanitario se duplicaron desde el 21 de diciembre de 2020, durante el segundo pico, y las enfermedades mentales van en aumento; algunas madres hasta se han quitado la vida en medio de la desesperación sin el pan de cada día.

La clase media, los pobres, y quienes no tienen ni sus necesidades básicas satisfechas están cargando la peor parte de la pandemia en Colombia. Del mismo modo sufren nuestros pueblos indígenas, afros y campesinos quienes han sido históricamente discriminados, violentados y expulsados de sus paraísos bien sea por intereses extractivistas y económicos legales, por los cultivos de uso ilícito o, por intereses geoestratégicos.

Han sido al menos 268 resguardos indígenas del país los que se han declarado en riesgo por la pandemia sumando ya más de 35 mil muertes incluyendo a los mayores y mayoras, y al consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Luis Fernando Arias, quien regresó a la madre tierra en 2021 tras un paro cardíaco días después de padecer la Covid-19. Arias luchó por semanas no solo contra el virus, sino contra el sistema de salud que retrasó su traslado a un centro asistencial con condiciones adecuadas para salvarle la vida.

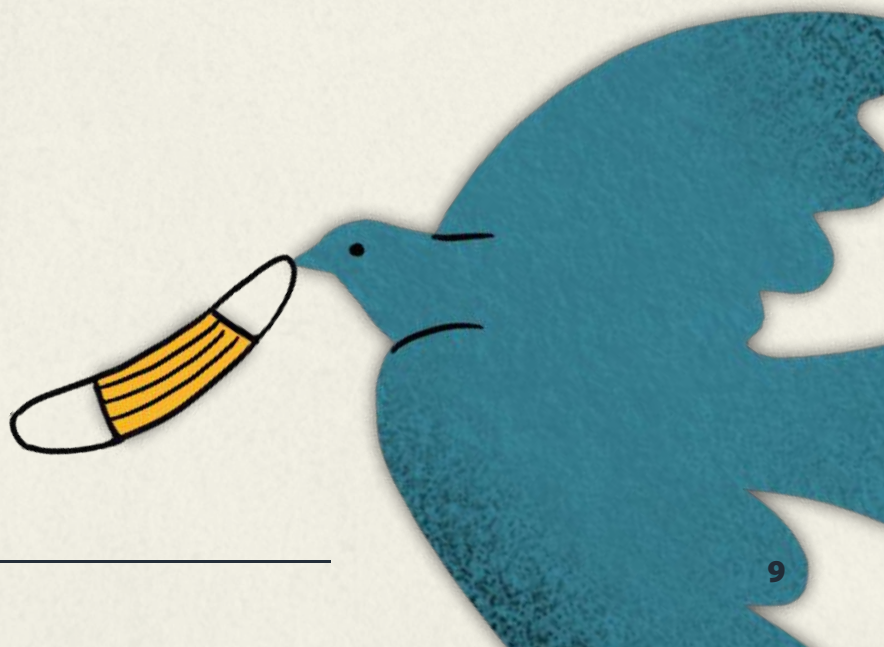


En el caso del pueblo negro y popular tampoco cesan las agresiones. El confinamiento, las inundaciones y los incendios en Chocó; los asesinatos de jóvenes populares en Cali; las muertes y desapariciones en Tumaco y Nariño; y el desplazamiento masivo en Buenaventura componen parte del paisaje del pueblo afro que se declara aporreado, ignorado, discriminado una y otra vez y en peores condiciones tras la llegada de la pandemia.

En el reclamo por invertir la balanza, se configura la lucha popular que sigue ardiendo en Colombia y que tiene una compleja historia de antecedentes y posibles explicaciones que superan la versión de medios comerciales y portavoces de gobierno y empresarios que reducen la gran movilización actual a una situación de desorden público protagonizada por vándalos.

Aunque prima la incertidumbre sobre el futuro de realidades como la pandemia, las instituciones que producimos el presente Informe Especial ofrecemos las certezas que hemos conseguido elaborar gracias a nuestros amplios equipos de investigadores e investigadores que, durante décadas, se han dedicado a documentar y comprender los fenómenos de la desigualdad, las violencias y la violación a los derechos humanos en el país, así como a acompañar a las comunidades que resultan más afectadas en medio del conflicto armado y, en la actual coyuntura, de la represión al movimiento social:

LAS VÍCTIMAS, LAS MUJERES, LOS INDÍGENAS, LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS EL PUEBLO AFRO Y LOS JÓVENES.





PRIMERA ENTREGA

ECONOMÍA Y DESIGUALDAD SOCIAL GLOBAL

Desde la irrupción del virus, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. La pandemia de la Covid-19 ha tenido el potencial de aumentar la desigualdad económica en, prácticamente, todos los países del mundo al mismo tiempo, una situación sin precedentes desde que empezara a registrarse este tipo de datos hace más de un siglo.

Según el más reciente informe de Oxfam presentado en el marco del Foro Económico Mundial Davos 2022, 'Las desigualdades matan', durante la pandemia se hicieron más evidentes las desigualdades a nivel mundial haciendo que el 99% de los ingresos de la humanidad se deterioren y empujando a la pobreza a más de 160 millones de personas. Mientras tanto, los diez hombres más ricos del mundo han duplicado con creces su fortuna, que ha pasado de 700 mil millones de dólares a 1,5 billones de dólares (a un ritmo de 15.000 dólares por segundo).

En tan solo los 9 primeros meses de la pandemia las mil mayores fortunas del mundo recuperaron su nivel de riqueza previo al imprevisto, mientras que para las personas más pobres esta recuperación podría tardar más de una década.

"Mientras la pandemia deja al descubierto una verdad antigua sobre la profundidad de las desigualdades y el fracaso de los modelos económicos y políticos, los

hombres más ricos del planeta incrementaron en medio billón de dólares su fortuna", explica Carlos Mejía, Director Ejecutivo de Oxfam Colombia. "Perverso, simplemente inaceptable, cuando tales cantidades servirían para garantizar vacuna global y evitaría que nadie caiga en la pobreza", agrega el investigador.

Ante esta dramática situación de la que Colombia no es ajena, el informe de Oxfam interpela a los gobiernos y les urge a darse cuenta de la ventana de oportunidad que tienen para construir una economía justa tras el paso de la pandemia. Una economía que proteja al planeta y acabe con la pobreza. Para lograrlo, asegura el informe, debe transformarse con urgencia el sistema económico actual que profundizó el patriarcado, la dominación blanca y los principios neoliberales.

La jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Crystalina Georgieva, expresó que el mismo confinamiento provocó un gran riesgo económico. "Ahora son las grandes divergencias y la recuperación desigual" las que provocan ese riesgo para la economía mundial, pues aunque todos estuvimos en la tormenta provocada por el coronavirus, no todos lo hicimos en el mismo barco. Algunos países tuvieron más capacidad que otros, y al interior de sociedades como la colombiana la desigualdad está

profundamente marcada: unos pocos tienen mucho y la mayoría tienen muy poco.

De acuerdo a Minouche Shafik, la directora del London School of Economics, en Colombia se necesitarían hasta once generaciones para pasar de un nivel de ingreso bajo a uno de ingreso medio. Si se calcula que una generación abarca 30 años, en el país se requerirían entonces más de 3 siglos para generar movilidad social, más del doble de generaciones que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (4,5 generaciones).

Consecuentemente indicadores como estos también tienen repercusión sobre la capacidad para la atención de la pandemia. "Las cifras muestran que una región con una enorme vulneración de derechos

y desigualdad, no tiene cómo prevenir ni atender personas afectadas por el virus", destaca Laura Gómez, gerente del Programa Derecho a la Igualdad de Oxfam Colombia.

Esta desigualdad, según el más reciente informe sobre pobreza multidimensional en el país elaborado por el Dane, afecta a un poco más de 9 millones de colombianos que viven en el Pacífico y la región central (Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima), dos extensos territorios que presentan los niveles más altos de este fenómeno. Cristian Llano, investigador del Cinep/PPP califica estas situaciones como "condiciones que no pueden ser más paupérrimas", y agrega que, "la pandemia mostró que el problema está más allá del tema de salud".



EL CASO **COLOMBIANO**

En Colombia, la pobreza aumentó después

de la llegada del Covid-19. Mientras en 2019, el 36% de los colombianos era pobre, para 2020 y a la espera de los cálculos para el año anterior la suma alcanzó el 42,5% de la población, según el Dane. Se estima que más de 21 millones de personas vivían en la pobreza en 2020 (6,8% más que en 2019), superando a países africanos como República del Congo y Burkina Faso de acuerdo a comparativos del Banco Mundial. Quienes más suman en estas cifras son los habitantes de las ciudades capitales: en Bogotá habría 3,3 millones de pobres, seguido por Antioquia con 2,32 millones, y Valle del Cauca con 1,67 millones. Bolívar con 1,71 millones y Córdoba con 1,092 millones siguen la triste lista de regiones más pobres.

El retroceso vivido en Colombia también se observa en el índice de GINI, pues a nivel nacional pasó de 0,52 a 0,54, llegando a ser la cifra más alta entre todas

las mediciones del Dane. Este coeficiente mide los términos distributivos globales. Juan Daniel Oviedo, director del Dane, aseguró al diario La República que este choque económico de la pandemia fue urbano en mayor proporción y el aumento en la pobreza en estas zonas del país estaría explicado, entre otras cosas, por las cuarentenas estrictas y las mayores cifras de desempleo.

Para hacerse una idea más clara sobre el panorama de la distribución de la riqueza en Colombia basta conocer las cifras entregadas en octubre del año anterior por parte del Banco Mundial. Según su informe 'Hacia la construcción de una sociedad equitativa en Colombia', los ingresos del 10% de los colombianos con mayores recursos es 11 veces mayor que el del 10% de la población más pobre.

Si bien el país inició el 2021 con un aumento en el desempleo respecto 2020, cerró el año con una tasa de 10,8%, la más baja desde diciembre de 2019, antes

de que empezara la pandemia. La población desocupada en Colombia para noviembre del año anterior se redujo en unas 620 mil personas y ahora se encuentra por el orden de los 2.7 millones de personas desocupadas (DANE, 2022). Además, los que cuentan con empleo no necesariamente están en condiciones de justicia laboral: bajos salarios, algunos sin las prestaciones sociales de ley, en puestos de trabajo precarios y de mala calidad, todo ello sin sumar datos de la informalidad laboral la cual en 2021 se situó con una tasa nacional del 48% según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE.

Algo aún más preocupante ocurre en el caso de la población juvenil (14 a 28 años), donde el desempleo es mayor que el de la tasa nacional. Si bien esta se redujo en 6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo de 2020, entre junio y agosto fue del 21,5%, es decir, que 22 de cada 100 jóvenes colombianos en edad productiva no cuentan con un empleo. Neiva, Florencia, Ibagué y Quibdó son las ciudades del país con mayores índices.

Las altas tasas de desempleo no son nuevas en las regiones más apartadas y pobres. En el Pacífico, en febrero de 2020, la tasa en Quibdó, Chocó, era de 20,6% y en tiempos de pandemia marcó una leve disminución al 19,7%. La realidad detrás de estas cifras revelan un panorama que agudiza la pobreza multidimensional en zonas como la Amazonía, una de las más afectadas. Allí las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son del 40% en Mitú, capital del departamento del Vaupés, y del 88% en el resto del departamento, según registros del Dane.

Resulta paradójico que tratándose del pulmón del mundo y la zona biodiversa más grande del planeta, las carencias abundan. Jhon Fredy Arango Trujillo, investigador indígena, explica que “en Amazonas no hay cobertura de agua potable, es agua lluvia; no hay red eléctrica, para comunicarse es con radiofonía o un kiosco Vive Digital. Esto exacerba el impacto del virus”.

En este departamento, donde el NBI es del 31% en la cabecera y del 58% en el resto del departamento, la defensora de derechos humanos en Leticia, Angélica Corredor, alertó sobre “la precariedad institucional que llega al punto de dejar muchas personas, sobre todo pertenecientes a pueblos indígenas, sin documentos de identificación. Algunos auxiliares administrativos argumentan que en ocasiones no tienen la papelería para hacerlo; y sin un registro civil o una cédula se limita el acceso a cualquier derecho fundamental, entre ellos, la salud”.

Otro de los lugares complejos en la misma zona fue Mitú, la capital del departamento de Vaupés. Hasta allí llegó a apoyar las labores médicas en el momento más complejo de la pandemia Jesús Alberto Royo, un médico barranquillero que incluso llegó a vivir en un hotel de esta ciudad para evitar ser estigmatizado por la población. Las dinámicas propias de un virus desconocido que estaba generando altas cifras de contagios y muertes produjo que los trabajadores del área de la salud fueran “atacados y excluidos por su probabilidad de adquirir el Covid ante la exposición constante que tenían por su labor”, recuerda Royo.



Allí, al suroriente del país en la frontera con Brasil, el contexto no era muy diferente al del Amazonas. Según Jesús Alberto Mitú solo cuenta con un hospital para la atención de todo el departamento y es incapaz de brindar una atención oportuna a poblaciones, especialmente indígenas, que se encuentran a muchas horas o incluso días de distancia del principal centro urbano de Vaupés.

Ante estas situaciones las comunidades ancestrales debieron apelar a su saber y su recursividad. “Es una paradoja. Las UCI en Bogotá y Medellín estaban llenas, pero en las zonas rurales de Riosucio, Chocó, donde hay puestos de salud, pero sabemos que está mal dotado, la única opción para muchos, fue acudir a lo tradicional y así sobrellevar el mal”, relata Marino Córdoba, representante de Afrodes, miembro del Consejo Nacional de Paz, Conpa y la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa del Territorio.

En otros casos también de poblaciones alejadas, las mismas comunidades han sido las responsables de su autocuidado. Por ejemplo, en El Capricho, un corregimiento de San José del Guaviare durante el momento más difícil de la pandemia crearon puestos de control para monitorear el flujo de personas en la zona.

“Como el Estado no llegaba debíamos protegernos de alguna forma y por iniciativa propia pusimos registros a la entrada y salida del corregimiento. Todos los días iban dos personas de diferentes

veredas a hacer ese puesto de control, desinfectando a las personas y sus objetos”, recuerda Olmes Rodríguez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de ese corregimiento.

Vivir en comunidades aisladas, alejadas, basadas en la socialización para la supervivencia y sin acceso a recursos necesarios como agua potable, ha significado un mayor riesgo para las poblaciones al momento de enfrentar una pandemia donde la premisa de prevención es el lavado de manos, higienizar los alimentos y mantener el distanciamiento social. La carencia de estos recursos hacen de la situación un cóctel devastador para los más vulnerables.

Con todo ello, las consecuencias económicas de la pandemia están provocando en el país una caída del Producto Interno Bruto (PIB) que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha relacionado con niveles similares a los de la crisis mundial de 2009, y que impactarán profundamente las zonas con menor desarrollo, alta informalidad laboral y mayor distancia geográfica porque “son los más vulnerables quienes asumen el costo” como lo analiza Oxfam en un artículo donde además de retomar las cifras de la Cepal, precisa que para latinoamérica se pronostican “52 millones de personas que podrían caer en la pobreza y 40 millones podrían perder sus empleos. Un retroceso de 15 años para la región”.



UNA NUEVA NORMALIDAD

Si los gobiernos empiezan a tomar medidas para reducir la desigualdad, en una década habrá 860 millones de personas menos en situación de pobreza. Lo anterior sería el escenario ideal pero ahora “las personas que viven en situación de pobreza (es decir, las personas que viven con menos de 5,50 dólares diarios) podrían haber aumentado en entre 200 y 500 millones de personas en el mundo en 2020 a causa de la pandemia de la Covid-19”, afirma el director Mejía.

“El futuro depende de las decisiones que tomemos ahora. Estamos en un momento crucial para la humanidad”, asegura Oxfam que detalla cómo la crisis afecta principalmente a las mujeres y a los grupos étnicos y racializados en situación de exclusión, ya que tienen más probabilidades de verse arrastrados a la pobreza, pasar hambre y no tener acceso a servicios de salud.

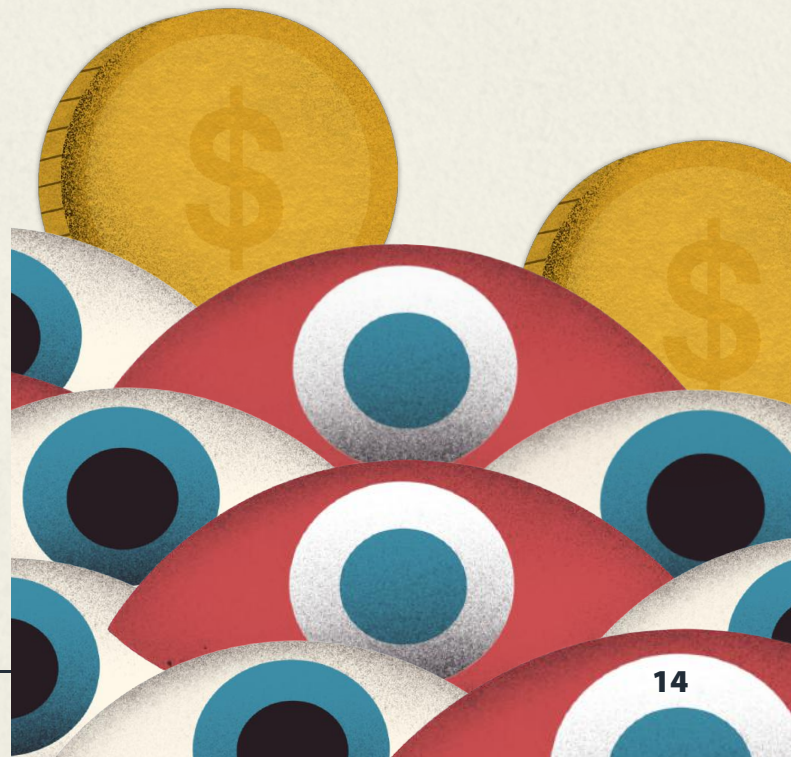
En Brasil, las personas afrodescendientes tienen un 40% más de probabilidades de morir a causa de la Covid-19 que las personas blancas, mientras que en los Estados Unidos, si la tasa de mortalidad de las personas de origen latino y afroamericano hubiese sido la misma que la de las personas blancas, aproximadamente 22 mil personas negras y latinas aún seguirían con vida. Las zonas más pobres de países como España, Francia e India presentan tasas de infección y mortalidad más elevadas. En el caso de Inglaterra, las tasas de mortalidad de las regiones más pobres duplican a las de las zonas más ricas.

Mientras tanto la situación colombiana, como lo explica el colectivo Orlando Fals Borda, está permeada por la corrupción gubernamental que ha marcado el destino de los pueblos que dirigen y hasta parecen haber hecho “todo lo que está a su alcance para abrir cada vez más la brecha de la desigualdad. La muestra más clara del fenómeno es el poder que mantuvo la familia Escrucería por más de 30 años en Tumaco”.

Desde la visión del Mayor Armando Wouriyu, líder de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE), “el Pacífico solamente es necesario para la República cuando necesita ingresos, facilitando la participación de las empresas extranjeras o de los funcionarios públicos que privatizan los recursos para el ingreso particular. Eso se plasma en los puertos de Buenaventura y Tumaco”.

Más allá de las razones económicas, sociales, culturales y hasta biológicas, en palabras del líder tumaqueño, Máximo Caicedo Preciado, todo se resume en racismo y discriminación: “A lo largo de la historia, por ser de raza negra o indígena hemos sido marginados y relegados al trabajo de obrero. Eso no se ha podido superar. Los de piel lavada y herederos de españoles creen ser los únicos que tienen derechos. Por eso nos llaman minoritarios”.

De allí que Carlos Mejía, de Oxfam Colombia, asegure que “necesitamos una nueva normalidad para que nuestros modelos económicos estén verdaderamente al servicio de todas las personas, y no solo de una minoría privilegiada”.



SEGUNDA ENTREGA

LAS MUJERES EN PRIMERA LÍNEA FRENTE AL COVID 19



Las mujeres han estado en la primera línea de lucha, atención y respuesta contra el Covid 19, a pesar de que son quienes sufren con más rigor los efectos de la pandemia. Su papel como cuidadoras principales de los hogares, de redes familiares y comunitarias se encuentra representado en la base sociolaboral más baja, ocupando espacios principalmente en los servicios de limpieza, trabajo doméstico o servicios varios. Dicha condición las lleva a contraer una importante carga como respuesta a la crisis sanitaria, eso sin contar el tema emocional y físico, asuntos preocupantes debido al alto nivel de violencia doméstica que se agudizó durante el confinamiento. La desigualdad ya de por sí evidente, se vio al desnudo nuevamente toda vez que la carga del trabajo no remunerado se vio incrementada con el cierre de las escuelas y colegios, la cancelación de puestos de trabajo, o con la llegada del trabajo remoto a los hogares, obligando a las mujeres a asumir este rol sin retribución alguna, aumentando su carga doméstica, la educación de los hijos, la atención de los ancianos, entre otras labores.

ONU Mujeres estima que, “en Colombia, tres de cada diez mujeres de 15 años y más no tienen un ingreso propio, en contraste con uno de cada diez hombres en el mismo rango de edad”. Según la misma agencia “el índice de feminidad de la pobreza indica que, por cada 100 hombres pobres, hay 118 mujeres. Sólo la mitad de las mujeres (53% en comparación con el 74% de los hombres) participan en el mercado laboral y ellas tienen fuerte presencia en segmentos de baja productividad y en empleos temporales, a tiempo parcial y en condiciones de informalidad y/o de autoempleo”.

Con las medidas de confinamiento, el retroceso laboral fue de casi una década. Así lo afirmó la representante de ONU Mujeres en Colombia, Bibiana Aído, quien señaló que la pérdida de la autonomía económica de las mujeres, sobre todo de aquellas que hacen trabajo informal, de servicio doméstico, o en sectores como el comercio, había ampliado la brecha de género en el ámbito laboral.

En Colombia 3 de cada 10 mujeres

de 15 años y más no tienen un ingreso propio. Sólo el 53% de mujeres participan en el mercado laboral.

*ONU Mujeres en Colombia



Esta realidad se vivió de forma especial en zonas como el departamento de Chocó, el más pobre del país según la Contraloría General de la República, donde la inversión en la población más vulnerable no alcanza el 1% en el Plan de Desarrollo Departamental. Yalira Dominguez es habitante del municipio de Istmina, una población de cerca de 40 mil personas que se encuentra a una hora y media de Quibdó, la capital del departamento. Según Yalira, esta es una cultura aún bastante marcada por el machismo y los roles tradicionales de género donde mientras el hombre es el sustento económico del hogar y todos los días sale a trabajar, la mujer se encuentra reservada para las tareas domésticas. Precisamente esta fue una situación que aumentó los riesgos de agresión y de maltrato para las mujeres.

“Aunque el encierro produjo que volviéramos a encontrarnos con muchos familiares y se fortalecieron relaciones vecinales, pues nos reuníamos a jugar parqués, dominó o cartas para sobrellevar el tiempo, el retorno de los hombres al hogar incrementó los casos de intolerancia, incomprensión y el maltrato psicológico hacia las mujeres que ya no contaban con ciertos espacios cotidianos conquistados y construidos para sí ante la ausencia masculina”, expone Yalira.

La poca confianza ante la baja efectividad y oportunidad de la justicia; el desconocimiento de

servicios de apoyo; y el miedo al señalamiento o a la sanción social de familiares y vecinos, son algunos de los factores más influyentes en lo que termina de completar y propiciar el ciclo de agresión: la baja o nula capacidad de denuncia de estos hechos.

De acuerdo con datos abiertos de la Fiscalía, durante 2021 se presentaron 5.462 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, además de 5.581 delitos sexuales y por lo menos 146 feminicidios. Este podría ser un subregistro si se tiene en cuenta que organizaciones como la Fundación Feminicidios Colombia reportó entre el 1 de enero y el 4 de noviembre del año anterior 243 mujeres asesinadas por razones de género.

Además, debido a las mismas estructuras patriarcales en las que están inmersas, siguen cumpliendo labores no remuneradas. En el marco de la presentación del más reciente informe de Oxfam, ‘Las desigualdades matan’, Carlos Mejía, Director Ejecutivo de esta entidad en Colombia afirmó que “la pandemia ha retrasado el camino hacia la paridad y las mujeres y niñas siguen siendo las más afectadas. Esta desigualdad se evidencia en el cargo desproporcionado que recae en los hombros de las mujeres: en Latinoamérica, cada día las mujeres en promedio dedican tres veces el tiempo que dedican los hombres a los trabajos de cuidado no remunerado (CEPAL).

De acuerdo con datos abiertos de la
Fiscalía, durante 2021 se presentaron

5.462

casos de violencia intrafamiliar
contra las mujeres además de 5.581
delitos sexuales y por lo menos 146
feminicidios.

*Fiscalía

EN EL CAMPO LAS MUJERES ENFRENTARON EL COVID 19 Y LA DESIGUALDAD

Sin duda las mujeres son agentes de cambio en una crisis que aún no se supera y que sigue dejando una estela de muerte mientras se alcanza la anhelada inmunidad de rebaño que si bien parece cercana por las vacunas, la aparición de variantes del virus no brinda los mejores escenarios.

Mientras eso sucede a un paso lento, en el sector rural las mujeres han jugado un papel fundamental, ya no solo desde el lugar de cuidadoras del hogar sino como productoras de la tierra continuando con un rol activo a pesar de las desigualdades en diferentes ámbitos. Así, las mujeres indígenas, rurales y afrodescendientes siguieron haciendo sus labores para responder a las demandas alimentarias de las ciudades, comunidades y sus mismas familias.

No obstante, desarrollan sus luchas en medio de un panorama hostil, pues en el contexto de una pobreza monetaria que se acerca al 50% de la población, hay colombianos que se acostumbraron a comer un día sí y un día no. Este fue uno de los principales hallazgos que entregó una investigación presentada a inicios de diciembre de 2021 realizada por la Red de Bancos de Alimentos y la Asociación Nacional de Industriales (Andi).

El informe, producto de un trabajo investigativo de tres meses, también concluyó que 3 de cada 10 colombianos pasan hambre y que cientos de hogares en departamentos como Amazonas, Vaupés, Córdoba, Guainía, Nariño, Chocó y La Guajira, cuenta con una sola comida al día; 560 mil niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica y el 54% de los hogares en el territorio nacional tienen inseguridad alimentaria.

Particularmente en regiones como el pacífico la situación ha sido realmente grave. Así lo hizo saber Rubiela Cuesta, lideresa social del Chocó y actualmente vicepresidenta del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato COCOMACIA.

Dice Rubiela que allí la gente no murió de Covid, sino de hambre. “En las comunidades la pandemia nos tocó muy difícil a las mujeres, no era posible sacar los alimentos; a muchas quienes trabajaban en el sector informal acá en Quibdó perdieron su única fuente de empleo. Y en las comunidades ni se diga. Allí las mujeres tuvimos que enfrentar al COVID, el hambre, la violencia doméstica y la presión y control de los actores armados que no permitían el paso de las comunidades para conseguir el sustento”.

En las zonas rurales del Chocó el aislamiento se vivió de una manera distinta, en razón a que se agudizó el riesgo para las mujeres en regiones afectadas por la confrontación armada. Señala Rubiela que en las comunidades y en las propias zonas urbanas, las mujeres y las familias cargan con el peso y el miedo de que sus hijas sean violadas y sus hijos reclutados por los actores armados. “Eso genera una gran presión sobre las mujeres, un peso emocional muy complejo, además del incremento en las cargas como mujeres cuidadoras”.

Pese a la profundización de la desigualdad, en temas de género el gobierno nacional proyecta invertir menos presupuesto cada vez. Así lo informó el portal la Silla Vacía y según la estrategia de Trazado Presupuestal del Departamento Nacional de Planeación. Según datos de dicha entidad consultados por el medio de comunicación, en el año 2020 fueron 3.2 billones de pesos los destinados para proyectos de inversión social encaminados a superar la brecha de género; para el 2021 fueron 2.9 billones, es decir 256 mil millones de pesos menos; y el Presupuesto General de la Nación aprobado para 2022 contempla un recorte mayor que deja este rubro con 2.7 billones de pesos a disposición de 35 entidades estatales encargadas de ejecutarlos.

Este hecho no es menos relevante si se tiene en cuenta que el actual presupuesto plantea un incremento de 1.8 mil millones de pesos, con respecto al 2021, para cargos de la Rama Ejecutiva pasando de 80.3 mil millones a 82.1 mil millones para este año.





TERCERA ENTREGA

PAZ Y DERECHOS HUMANOS DURANTE LA PANDEMIA

La firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016 supuso para el país y en especial para sus regiones más olvidadas la esperanza de desarrollo, participación política y paz. Sin embargo, el panorama se ha tornado generándose una exacerbación del conflicto que ha implicado masacres, desplazamientos forzados, asesinato de líderes y lideresas sociales, y amenazas, destierro y homicidio de quienes dejaron las armas. Se produjo, además un rearme, y el grupo político que prometió hacer trizas el Acuerdo llegó al gobierno nacional desde donde, de acuerdo con las miradas de investigadores del Cinep en la Secretaría Técnica que hace seguimiento a la implementación, estaría seleccionando - a su interés y no de forma integral y de buena fe como dicta la ley- aspectos del Acuerdo para implementar a su manera. Hasta el 15 de febrero de 2022, eran 306 los firmantes y más de 1300 los líderes y lideresas sociales asesinados desde la firma, según Indepaz.

En los territorios donde el miedo y el terror han regresado, entre analistas y expertos, y en la misma comunidad en reincorporación, se exige a gritos que el gobierno de turno cumpla sus compromisos con el Acuerdo para mermar el desangre y desastre humanitario actual, en especial los más urgentes tales como garantías para la vida, acceso a tierras, sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito en vez de erradicación forzada, garantías para la oposición y la participación política, desmantelamiento de las estructuras paramilitares, implementación de los

enfoques étnico y de género y participación de las comunidades en los PDETs.

Las violaciones a los derechos humanos en Colombia preocupan por su curva incremental en los últimos tres años. Por ejemplo, para 2020 aumentaron al igual que las infracciones al Derecho Internacional Humanitario y la violencia política con relación a 2019, según la Revista Noche y Niebla No. 62. del Banco de Datos del Cinep.

En 2020 el informe registró 193 asesinatos, 61 atentados, 114 amenazas y 91 agresiones contra comunidades, líderes y lideresas sociales. El segundo semestre de ese año fue el de mayor impacto sobre la vida de defensores de derechos humanos, presentándose un aumento en los asesinatos (112 solo en este periodo de tiempo) y amenazas (66).

Los grupos paramilitares fueron los principales presuntos responsables de las violaciones a los derechos humanos, con 581 victimizaciones, seguidos por la Policía Nacional, con 490 y el Ejército Nacional con 243. Entre los hechos documentados resalta que 554 fueron amenazas, 263 detenciones arbitrarias, 194 ejecuciones extrajudiciales y 178 lesiones físicas.

Los campesinos, por su parte, continúan protagonizando éxodos al estilo de los peores años de la guerra. En Ituango, Bajo Cauca y Urabá antioqueño, en 2021 volvieron a aparecer las imágenes de mujeres con



niños en brazos y hombres de sombrero con costales al hombro, arrumados en colchonetas y en los cascos urbanos para proteger sus vidas tras amenazas de armados. En Cauca, entre tanto, todo lo anterior se repite con la diferencia de que los funerales son más frecuentes: es el departamento con más masacres, y más líderes sociales y firmantes de paz asesinados de acuerdo a registros de diferentes organizaciones que monitorean esta situación (Cinep/PPP a través de su Revista Noche y Niebla, Indepaz, Somos Defensores, Defensoría del Pueblo y otros).

Las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” también siguen presentándose y la violencia política sigue en ascenso semestralmente desde la llegada de Duque a la Presidencia, como lo registra el Banco de Derechos Humanos de Cinep/PPP, un fenómeno que incluso puede incrementarse en este 2022 con las jornadas electorales.

Por su parte, las ciudades también fueron escenario de violencias en medio del Paro Nacional. La indignación ante una eventual reforma tributaria que pretendía gravar con más impuestos a los alimentos y, en general, poner más rentas sobre la clase media y baja en medio del revolcón social que provocaron el virus, el confinamiento y la respuesta estatal, fue mucho mayor al miedo de eventuales contagios por el Covid-19 y desde el 28 de abril de 2021 inició una gran movilización nacional que reunió en las calles un enorme y diverso descontento popular.

En Cali, Bogotá, Barranquilla, Popayán, Medellín y otras ciudades a diario las protestas -de múltiples formatos- fueron protagonizadas por jóvenes, indígenas, madres, estudiantes, obreros, campesinos y ciudadanos indignados y hastiados del hambre, la muerte y la violencia que han soportado históricamente y que se exacerbaban con la pandemia.

Y aunque el Paro sembró un mensaje de esperanza sobre el futuro y las transformaciones necesarias para el país, también dejó trágicos saldos. De acuerdo a un informe de Naciones Unidas, entregado el 13 de diciembre de 2021, miembros de la fuerza pública participaron en la masacre de 14 personas ocurrida entre el 9 y 11 de septiembre de 2020 en Bogotá, en el contexto de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de patrulleros de la Policía Nacional y que podría interpretarse como el conato del Paro Nacional que dejó a su paso una estela de sangre y violaciones a los derechos humanos. La campaña Defender La Libertad, integrada por Cinep y decenas más de organizaciones de la sociedad civil colombiana, documentó un total de 7.620 agresiones en el marco de la protesta social en 2021, entre ellas homicidios, heridos, violencias sexuales y basadas en género, agresiones a personas de defensoras de derechos humanos y prensa, y detenciones arbitrarias e ilegales.

Además, fue altamente preocupante para el país y la comunidad internacional que el Estado colombiano haya respondido usando la fuerza de forma desmedida durante el Paro en el que jóvenes, campesinos y otros exigían, justamente, garantías para la vida digna. “El tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social fue similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados”. Es decir, que “se usaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno”, aseguró el informe final de la Misión SOS Colombia liderada por Cinep/PPP. Esta Misión integrada por comisionados de 11 países documentó once estrategias de tratamiento de guerra dado a la protesta social en Colombia:





ONCE ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO DE GUERRA DADO LA PROTESTA SOCIAL EN COLOMBIA.



- 1.** Uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
- 2.** La utilización de armamento con municiones no permitidas y el uso indebido de municiones permitidas para causar mayor letalidad sobre la salud y la vida.
- 3.** Casos de víctimas manifestantes heridas con armas blancas y de fuego que portaban miembros del ESMAD.
- 4.** Métodos de persecución a participantes, brigadas de salud, defensoras de derechos humanos, personas heridas producto de las intervenciones de la Fuerza Pública, medios alternativos de comunicación, algunos integrantes de iglesias y cualquier persona que decida apoyar o participar de una u otra forma de las manifestaciones.
- 5.** Montajes judiciales, implantación de pruebas y/o abuso de poder para la judicialización de personas manifestantes y no manifestantes.
- 6.** Acciones de terror y control social a través de toques de queda, el uso de macanas para golpear directamente a jóvenes y personas manifestantes, aun cuando éstas estaban resguardadas en casas, estacionamientos, tiendas comerciales o se encontraban heridas.
- 7.** Infiltración de agentes de policía vestidos de civil en las manifestaciones con el fin de generar escenarios de confrontación y hacer un seguimiento selectivo a personas manifestantes y/o líderes y lideresas.
- 8.** Se pudo identificar, en algunas regiones como Valle del Cauca, Nariño, Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, el fenómeno del paramilitarismo y la presencia de civiles armados que, en connivencia con la Fuerza Pública atacaron con armas de fuego de largo y corto alcance a las personas manifestantes.
- 9.** Se pudo identificar en distintos testimonios violencias basadas en género manifestadas en tocamientos y lesiones al cuerpo de mujeres durante la protesta con contenido sexual (senos, brazos y cabello principalmente); amenaza de violación contra mujeres manifestantes (incluidas menores de edad), brigadistas, periodistas, abogadas y defensoras de derechos humanos.
- 10.** Discursos clasistas y racistas como acciones de agresión contra pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y jóvenes de sectores populares.
- 11.** Utilizar la oscuridad de la noche para perpetrar las agresiones masivas más violentas y la persecución a los manifestantes y no manifestantes.

Y presentó 18 acciones inmediatas que se solicitan al Gobierno de Colombia, 8 acciones a Instancias Multilaterales Internacionales, 14 acciones que involucran al Estado colombiano, 4 a la Comunidad Internacional y 6 a las empresas. La garantía para el acceso a la justicia fue una de ellas; además la Misión pidió que se detengan los actos de persecución contra las personas involucrados en las manifestaciones y las personas que brindan apoyo a los manifestantes; y sugirió el reinicio de un espacio de diálogo por parte del Gobierno con los sectores involucradas en el Paro para abordar sus causas estructurales; así como realizar una reforma estructural de la Policía y que se garantice el derecho a la protesta para que estos hechos no se repitan.

Por su parte, información reportada desde las organizaciones que integran la Red Nacional de Bancos de Datos regionales demuestran que en el marco de las movilizaciones del Paro Nacional, entre los meses de abril, mayo y junio, se presentaron la mayoría de las detenciones arbitrarias durante el primer semestre del año con 133, 167 y 47 victimizaciones respectivamente. Así lo registró la Revista Noche y Niebla No 63, del primer semestre de 2021.

No obstante, el panorama en materia de derechos humanos durante todo el año tendió a empeorar como lo reveló la edición No 64 de la misma publicación del Cinep/PPP, que recopiló datos de todo el 2021. A lo largo del año anterior, según Noche y Niebla, se registraron 1.472 casos de violaciones a los derechos humanos, siendo la Policía Nacional (1.102) y los grupos paramilitares (286) los presuntos responsables con más eventos en su contra.

SE REGISTRARON
1.472
CASOS DE VIOLACIONES A
LOS DERECHOS HUMANOS,
SIENDO LA POLICÍA NACIONAL
(1.102)
LOS GRUPOS PARAMILITARES
(286)

"Fuente: Cinep/PPP"



En cuanto a los actos de violencia político-social, Cauca con 331 hechos y Norte de Santander con 116 son los departamentos donde más se presentaron agresiones de este tipo que en total en el país llegaron hasta los 898 registros. Los asesinatos (387), las amenazas (206) y las lesiones físicas (179) fueron las principales modalidades en las que la violencia de este tipo se manifestó.

Así mismo, en lo que respecta a las infracciones al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC), se reportaron en todo el año 344 infracciones de este tipo, principalmente en los departamentos de Cauca (153), Antioquia (42) y Guaviare (27). Llama la atención que en este sentido los hechos provocados por la Policía (16) y el Ejército Nacional (38) superan a las 54 acciones efectuadas por combatientes de grupos sin identificar.

Todos estos hechos documentados y otros tantos ocurridos en el pasado sobre los que incluso hay sentencias en contra de miembros de la Policía y el Ejército, han puesto de nuevo en la agenda la discusión sobre la importancia de reformar los procedimientos de la fuerza pública ante el legítimo derecho a la protesta consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política.

Para 2022 nuevamente el patrón violento no ha dejado de repetirse. Masacres, asesinatos selectivos de líderes sociales y atentados en Arauca, Cauca y Norte de Santander se ubican como los principales focos de confrontación en el país. El control social, de rentas económicas, cultivos ilícitos y corredores para el tránsito de drogas y armas son el botín que involucra la disputa de diversos grupos ilegales como las disidencias de las Farc, la guerrilla del ELN y carteles de la droga asociados a estructuras paramilitares como el Clan del Golfo, que luego de la captura de su máximo líder, alias 'Otoniel', ha entrado en disputa por decidir su heredero entre Jobani de Jesús Ávila, alias 'Chiquito Malo', y Wilmer Antonio Quiroz, alias 'Siopas'.

En medio de este panorama la defensa de los derechos humanos se convierte en una tarea de alto

riesgo. De hecho, organizaciones como Amnistía Internacional han catalogado a Colombia como el país más peligroso del mundo para desarrollar esta labor. Solo hasta inicios de febrero de 2022 han sido asesinados en el país 17 de ellos, 1.304 desde la firma del Acuerdo en 2016, según reportes de Indepaz.

“Nosotros hemos dicho que del norte del Cauca no nos vamos y esa decisión la refuerzan los mayores. A nosotros nos mueve es la comunidad y las bendiciones de los mayores siempre están con nosotros, y eso me ha dado fuerza para asumir ese mandato”, expresa desde un lugar desconocido del suroccidente del país Rossana Mejía Caicedo, lideresa ambiental y Consejera Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, quien debió exiliarse en su propia tierra debido a distintas amenazas que ha recibido por su labor en defensa del medio ambiente y las comunidades.

En este sentido, Mejía también reconoce que una situación como la pandemia, que obligó al confinamiento de la población, fue algo que “facilitó la movilidad y desarrollo de estrategias de los grupos armados en los lugares que hacen presencia, pues se apropiaron de espacios a los que antes no entraban bien por la actividad de personas o la presencia de fuerza pública que justamente se retiró ante la inactividad por la pandemia”, explica.

En estos mismos territorios han padecido una situación similar a la de los líderes sociales los firmantes del Acuerdo de Paz y ahora militantes del partido político Comunes, hombres y mujeres que desde las regiones están comprometidos con sus procesos de reincorporación social, política y económica y luchan por salir adelante junto a sus familias a través de iniciativas productivas y comunitarias. Una de sus principales dificultades han sido las garantías de seguridad.



Sobre esta preocupación se ha manifestado la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) a la Implementación del Acuerdo Final, conformada por el Cinep/PPP y el Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac).

Para su octavo informe del periodo agosto-noviembre de 2020, en materia de garantías manifestaron la persistencia de violencia política contra los miembros del partido Comunes, los excombatientes en proceso de reincorporación y sus núcleos familiares y enfatizaron en que si bien el Acuerdo de Paz contempla este componente de seguridad tan importante “la implementación y eficacia de estas medidas ha sido limitada, pues la situación de inseguridad que afecta a los excombatientes continúa en departamentos como Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá y Meta, que concentran el 58% del total de excombatientes asesinados”.

Posteriormente, en el noveno y décimo informe relativos a 2021, la Secretaría señaló que los mecanismos como el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para El Ejercicio de la Política (Sisep) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), mantuvieron un funcionamiento limitado y desarticulado con otras instancias y con los organismos del Estado y que fueron negligentes en aquellas regiones que requerían prioridad en materia de seguridad, a pesar de haberse emitido diversas denuncias y alertas tempranas.

El pasado 28 de enero la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por el bajo nivel de implementación del componente de garantías de seguridad para estos firmantes y anunció la creación, en dos meses, de una Sala Especial de Seguimiento para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas. Entre otras cosas, el fallo ordena priorizar las zonas más afectadas por la violencia que se han establecido en por lo menos 25 municipios de los departamentos de Antioquia, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

De acuerdo al último informe del año 2021 entregado por la Misión de Verificación de la ONU, durante el año anterior fueron asesinados contando desde 2016, 303 excombatientes (10 de ellos mujeres). La situación ha generado rechazo, exigencias y reclamos tanto de organizaciones sociales, la sociedad civil, así como de los mismos excombatientes; en enero de este año, el colectivo de reincorporados se tomó el Metro Medellín con megáfonos y pancartas para denunciar la grave situación que atraviesan. Les acompañaron algunos de los jóvenes que se movilizaron en el Paro Nacional y que se unen en su reclamo por la implementación del Acuerdo que incluye garantías para la protesta y la movilización social y transformaciones que, de lograrse, aportarían a superar no solo las violaciones a los derechos humanos sino también las desigualdades.



unamiradahaciaelcambio.cinep.org.co



UNA MIRADA HACIA EL CAMBIO

Revelando las desigualdades
y la violencia en Colombia
que el COVID profundizó.